

de nuestras ventas de materias primas y productos agroalimentarios se concentra en los países europeos”, sin barreras ni aranceles, frente al 20% de comercialización en otras latitudes territoriales.

Por ello, el profesor pide prudencia sobre la alerta de los agricultores y ganaderos ante la entrada de alimentos desde países fuera de este espacio común, como pueden ser Marruecos o Brasil. Según el también director de la Sección de Economía Agroalimentaria del Instituto de Desarrollo Regional, “no hay que olvidar que las balanzas agroalimentarias de España, Castilla-La Mancha y la Unión Europea son positivas”. Es más, “nos interesa que no haya conflicto de comercio internacional” ante un juego de mercado que “nos favorece”, pues, aunque los criterios de trazabilidad para la producción alimentaria europea son muy exigentes y costosos -con controles en todos los eslabones, ambiental, sanidad vegetal, sanidad animal, bienestar animal y para el consumo-, “existen las ayudas” que compensan las rentas.

Retos

De cara al futuro, los retos la producción agroalimentaria están condicionados por la evolución social, pero, sobre todo, por los efectos del cambio climático, con anomalías tales como las cada vez más habituales sequías. Es el caso que Castilla-La Mancha arrastra desde hace varios años, con consecuencias letales para todo tipo de cultivos, especialmente para los herbáceos, que en la presente campaña tendrán una disminución media del 80 por ciento.

Por ello, y para dar cumplimiento a

COMPETENCIAS

El Estatuto de Autonomía de 1982 recogía en el título IV artículo 31 la competencia en exclusiva en agricultura, ganadería, industrias agroalimentarias, denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la región, en colaboración con el Estado.

En los primeros años de autonomía, Fernando López Carrasco, consejero de Agricultura y Medio Ambiente entre 1983 y 1995, supo ver las debilidades del sector agropecuario en la región y de sus pequeños productores, e impulsó el fortalecimiento de las cooperativas, sobre todo vinícolas, para ser más competitivos en la comercialización. El empuje a la conversión en sociedades más dimensionadas fue un punto de inflexión que marcó la creación de la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (UCAMAN), actualmente Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, con 550 sociedades y más de 160.000 socios.

A lo largo de estos años se han aprobado leyes en distintas áreas como la Ley del Aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras de 2000, la ley de la explotación agraria y desarrollo rural de 2004, la de creación del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) de 2015, la controvertida ley de Agricultura familiar, aprobada recientemente, o la Ley de la viña y el vino, autorizada el pasado verano.

Precisamente, el vino es uno de los sectores más potentes en la economía regional, con el viñedo más grande del mundo, 437.000 hectáreas, 63.000 de ellas en ecológico, y unas ventas internacionales que encabezan la cartera de comercio exterior, y que en 2022 alcanzaron los 706 millones, tras crecer en un 4,1% respecto a 2021.

la gestión sostenible de los recursos naturales, sin olvidar el mantenimiento y desarrollo de una economía rural estable, Castillo apunta a nuevos retos que podrían aumentar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos de la región.

El objetivo es no sólo “reducir la huella hídrica y las emisiones de carbono”, sino “ser un referente en la generación de los llamados créditos ambientales”.

Se trata de un sistema ya contemplado por la Unión Europea, que permite a los productores recibir ayudas por sus actuaciones positivas en la preservación sostenible del medioambiente.

“Se llaman mercados voluntarios del carbono y ya existen en provincias como Ciudad Real, Albacete y Cuenca”, señala el experto, a través de empresas “que ofrecen a los agricultores certificar sus proyectos ambientales,

con la llamada agricultura de carbono, para revender los créditos beneficiosos en el entorno”.

Tiene un doble objetivo, según el profesor: “luchar contra el cambio climático y tener un ingreso complementario a la actividad principal de los titulares de explotaciones agropecuarias, como es la producción del alimento y de la materia prima”.

“Es una nueva dimensión, que puede ser interesante para los productores castellanomanchegos”, insiste, y que conlleva “un cambio de mentalidad”. También innova los actuales ecosistemas de la PAC, “que no gustan a casi nadie”.

Regadíos

Este desafío está relacionado con otro de los hitos alcanzados en Castilla La Mancha, como es la mejora en la eficiencia de los regadíos, muy alejados de “aquellos sistemas de manta”, aunque la región sólo tenga un 15% de superficie regada, correspondientes a casi 583.000 hectáreas.

“El tema del agua es un tema muy complejo”, subraya Castillo, que apunta a un uso del recurso suficiente en territorios más desérticos como la región “para mantener la actividad agraria y ganadera y fijar población”.

“Tenemos que optimizar el uso del agua” y, a la vez, “ser lo más productivos posible”. En este sentido, el profesor de Política Agraria y Desarrollo Rural celebra los esfuerzos de la región castellanomanchega en la reducción del uso de agua por hectárea, “el mayor ajuste de Europa”, que también implica menos presencia de la huella hídrica. Es un ahorro “que pocos han valorado”, y que en los potenciales mercados de carbono “nos podíamos haber resarcido”.

